



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

EXPTE. NRO: 110548/2019

AUTOS: “WORKJET S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 52/63 contra la Resolución nro. 67/19 que desestima el recurso de impugnación deducido en oposición a las actas de infracción y deuda oportunamente notificadas al contribuyente.

Que notificada de ello, se hizo saber a la rubrada, que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 39 bis inc. b) del Decreto Ley 1285/58, conf. Art. 26 de la ley 24.463

Que a fs. 99, el organismo de recaudación ordenó la remisión de los presentes obrados informando el incumplimiento del requisito de previo pago de la multa impuesta, en los términos del art. 15 de la ley 18.820.

Que la aquí accionante, en su escrito recursivo, plantea la imposibilidad de afrontar el ingreso. Al mismo tiempo deduce la inconstitucionalidad de la exigencia del “solve et repete”.

Que así las cosas en relación al planteo introducido, el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, ello no importa una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), pues existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección”, sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287 consid. 10).

En el mismo orden, si bien el Alto Tribunal admitió la plena operatividad de las previsiones del art. 8 inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma sustancialmente análoga al art. 18 de la C.N. señaló que, pese a ello, aquellas no desplazan ni derogan las directivas del art. 15 de la ley 18.820 - del entonces vigente - art. 12 de la ley 21.864 en cuanto establecía la obligación de depositar los aportes omitidos, su – actualización monetaria, recargos e intereses para acceder a la instancia judicial, salvo que el interesado afirme y pruebe que el exigido como depósito previo resulta exorbitante desproporcionado con su concreta capacidad económica. Similar temperamento fue adoptado por el Máximo Tribunal, en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar el art. 15, segunda parte, de la ley 18.820 (ver Fallos 215:225 501 ; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 240; 296:40 57; 307:1753).

Que observado con criterio amplia y a partir de la documentación obrante a fs. 65/81, corresponde encuadrar al presente en la primera de las hipótesis de excepción y abordar el planteo introducido en esta Alzada.

Que las actuaciones tienen su origen en las verificaciones de cruces informáticos en donde surgiría la aplicación de beneficios amparados en la ley 25250 sobre trabajadores cuya alta se registró en vigor de la ley 25877 (ver informe de inspección obrante a fs. 29/31).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

En oportunidad de formular su defensa, el contribuyente esgrime, entre otras cuestiones, que si bien la ley citada en último término deroga el régimen anterior, el decreto 817/04 reglamentario, deja subsistente los beneficios ya otorgados por dicha norma mientras se encuentren vigentes los contratos individuales de trabajo en función de los cuales fueron otorgados (fs. 5). En aval de sus afirmaciones, además de las prueba documental ofrece prueba pericial a efectos de que el experto informe la el cumplimiento de la normativa, modalidad de trabajo, forma de prestación de servicios, existencia de ingresos duplicados y cualquier otro dato de interés.

Que respecto de esta última, de conformidad a lo expresado a fs. 42, el organismo consideró que "la totalidad de los puntos de pericia no aportarán –de llevarse a cabo- elemento alguno que permita desvirtuar los ajustes intimados", rechazando, en consecuencia su realización.

Que a tenor de los agravios vertidos a fs. 51/63, las quejas se dirigen, hacia la nulidad de la resolución administrativa por cuanto al no producir la prueba ofrecida torna la resolución en cuestión en arbitraria y en detrimento de las garantías de defensa en juicio y derecho a ofrecer y producir pruebas.

El artículo 18 de la Constitución Nacional consagra las garantías del debido proceso y defensa en juicio, preceptos sobre los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "... todo procedimiento, tanto administrativo como judicial, debe responder al imperativo del debido proceso, conforme a su naturaleza particular" (Fallos: 325:1649, 327:1249). De modo tal que cada vez que se está frente a la Administración en un procedimiento del cual pueden derivarse consecuencias para la esfera de derechos e intereses de los particulares, éstos gozan de la garantía constitucional de defensa. Esta garantía, en el ámbito del derecho administrativo, se encuentra receptada en el artículo 1º, inciso f) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos n° 19.549, conocida como "debido proceso adjetivo", el cual comprende: el derecho a ser oído, derecho a ofrecer y producir pruebas, y derecho a una decisión fundada. Asimismo, el apartado 2 de la norma mencionada, contiene otro principio del procedimiento administrativo: la primacía de la verdad material o verdad jurídica objetiva, que es una directiva inalienable del régimen jurídico argentino.

Este dogma impone a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar que se practiquen todas las diligencias que sean conducentes para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada. Ello así pues, es objeto de la prueba formar el convencimiento del juez acerca de la existencia o no de hechos de importancia en el proceso; no siendo el organismo ajeno a su producción, ya que las aseveraciones que señala deben ser corroboradas en las actuaciones, del mismo modo que ha de permitirse al impugnante probar sus dichos por los medios que estime conveniente, sin perjuicio de la ulterior consideración sobre su efectividad al momento de resolver.

Que, en otro orden, no ha de dejar de advertirse que si el organismo administrativo desestima o rechaza la producción de ciertas pruebas alegando que no son relevantes o necesarias para fundar la resolución a dictarse, de algún modo está prejuzgando sobre ésta al indicar, aunque sea someramente, que aspectos serán considerados y cuáles no. Por ello, el procedimiento administrativo debe ser abierto a prueba, no sólo cuando la administración lo considere necesario, sino cuando el particular lo solicita para acreditar los hechos que invoca. Con ello, no sólo se garantiza el derecho de defensa de éste, sino una mayor racionalización y eficacia de los trámites administrativos, facilitándose a los funcionarios que deben expedirse, una información más amplia y completa (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. el 31.10.96, "Laboratorio Medex Omicron").

En consecuencia, sin que ello importe pronunciamiento alguno sobre los aspectos legales que determinaron la imputación de los cargos discutidos en el sub lite, corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar el dictado de una nueva previa producción de la totalidad de la prueba ofrecida.

Por ello lo expuesto el Tribunal **RESUELVE:** 1) Declarar formalmente admisible el recurso interpuesto; y 2) dejar sin efecto la resolución recurrida de conformidad a lo expuesto en los considerandos precedentes. Sin costas en la Alzada. Por disposición del Tribunal, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p. 4 y conc.). Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).

Fecha de firma: 13/06/2024

Alta en sistema: 19/06/2024

Firmado por: FERNANDO STRASSER, JUEZ DE CAMARA - SUBROGANTE

Firmado por: SEBASTIAN EDUARDO RUSSO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JAVIER BENITO PICONE, SECRETARIO DE CAMARA



#34488535#414827357#20240612143956836



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

